

# LOS ACTOS NEUTRALES Y EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES\*

## THE NEUTRAL ACTS AND THE MONEY-LAUNDERING OFFENCE

DANIEL MÉNDEZ GALLO\*\*

**Resumen:** La crisis económica ha diezmando las arcas públicas, provocando que se aumenten los esfuerzos para conseguir ingresos. Para ello, se intenta eliminar la existencia de capital no controlado por la Hacienda pública, a través de una legislación cada vez más expansiva. En materia de blanqueo de capitales también se ha vivido esta expansión, quedando inculminadas conductas con una clara vocación delictiva pero también otras que se realizan dentro de los estándares sociales, las conocidas como actos neutrales. Analizaremos la posible subsunción de tales acciones en el tipo del delito de blanqueo de capitales, mediante el estudio del debate doctrinal y jurisprudencial, para fijar los límites de la intervención del derecho penal respecto de las conductas socialmente adecuadas.

**Palabras clave:** blanqueo de capitales, actos neutrales, imputación objetiva, autoría, riesgo permitido.

**Abstract:** The economic crisis has decimated the public coffers, producing an increase in efforts to generate revenue. For this reason, eliminating the existence of capital beyond the supervision of the Tax Authority has been attempted through ever-expanding legislation. With regard to money laundering this expansion has also been imposed, criminalising not only conduct of a clear criminal vocation but also that which falls within social standards: the so-called neutral acts. We will analyse the possible subsumption of such actions in the money laundering offense by examining jurisprudence and case law, in order to establish the limits of the intervention of criminal law with respect to socially appropriate conduct.

**Key words:** money laundering, neutral acts, proximate cause, authorship, allowed risk.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN; II. MARCO CONCEPTUAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES; 1. Denominaciones; 2. Bien jurídico protegido; III. ACTOS NEUTRALES; 1. Concepto; 2. Problemática en el blanqueo de capitales; 3. ¿Cuándo un acto «neutral» puede constituir una acción de blanqueo?; 4. Actos neutrales en el artículo 301.2 y 301.3 CP; 5. Análisis jurisprudencial; 6. Especial referencia a la figura del abogado; IV CONCLUSIONES; V. BIBLIOGRAFIA.

---

\* Fecha de recepción: 4 de septiembre de 2017.

Fecha de aceptación: 28 de febrero de 2018.

\*\* Graduado en Derecho. Universidad Autónoma de Madrid. Correo electrónico: daniel.mendezg@hotmail.com. Trabajo de Fin de Grado tutelado por Julio Díaz-Maroto y Villarejo.

## I. INTRODUCCIÓN

Durante estos diez últimos años venimos sufriendo una grave crisis, que ha minado considerablemente las arcas públicas. Esto ha llevado a que desesperadamente se busquen ingresos para estas y una de las zonas donde se ha puesto especial interés es la de intentar reducir a lo mínimo posible los capitales que se mueven a las espaldas de la Hacienda Pública. Inspectores fiscales, Ministerio Fiscal, etc. han sido los encargados de llevar a cabo esta tarea, no sin contar a sus espaldas con una legislación tendente a ampliar cada vez más su radio de acción.

En este punto, se encuentra el delito de blanqueo de capitales. Tras la reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, actualmente se encuentra vigente la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. En esta última, el art. 301.1 CP dispone dos conductas para que concurra el citado delito: en primer lugar, es necesario que se adquieran, posean, utilicen, conviertan, o transmitan bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona y, de forma independiente; en segundo lugar, que se realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.

Esta nueva redacción nos lleva a analizar los actos cotidianos del tráfico diario que son ofertados y demandados a cualquier persona. Estos son los conocidos como actos neutrales. Y nos preguntamos si es posible que este tipo de actividades puedan quedar abarcadas por el tipo o deban mantenerse fuera por algún tipo de interpretación restrictiva.

El presente trabajo pretende exponer cuál es la situación actual de la discusión de los actos neutrales en referencia al blanqueo de capitales y dar una herramienta teórica que permita una restricción correcta del ámbito de este tipo delictivo. Entendemos que su punibilidad conllevaría graves riesgos constitucionales al incluir en el tipo conductas amparadas por el principio de libertad de la Constitución y por acercarnos a un derecho penal del enemigo. Para ello, en primer lugar, vamos a estudiar la problemática general sobre el blanqueo de capitales. Una vez sentados cuáles son los aspectos básicos de este delito, pasaremos a detallar qué es lo que entendemos por actos neutrales. A continuación, analizaremos cuáles son las opiniones de la doctrina y la jurisprudencia sobre dicha problemática y cuáles son las propuestas que nos ofrecen. Por último, concluiremos ofreciendo nuestro pensamiento y solución sobre la posible punibilidad de los actos neutrales.

## II. MARCO CONCEPTUAL DEL BLANQUEO DE CAPITALS

### 1. Denominaciones

El problema del blanqueo de capitales es por todos reconocido como un fenómeno de carácter supranacional y ligado a la delincuencia organizada. Tras la reforma del Código

Penal por la LO 5/ 2010<sup>1</sup>, es este término el utilizado en nuestro CP para hacer referencia a este tipo de ilícito en los artículos 301 a 304. Con esto, se termina aceptando dicho término, manejado comúnmente por la sociedad y en el resto de los ordenamientos<sup>2</sup>, del cual el legislador había intentado huir y gran parte de la doctrina ha criticado por su escaso rigor técnico y por tratarse de la jerga del hampa<sup>3</sup>.

Una vez sentado lo anterior, se han terminado de superar denominaciones como la mantenida por el CP de 1995 «conductas afines a la receptación», que podrían llevar a equívoco<sup>4</sup>. No debemos olvidar, que el blanqueo no es una conducta receptadora, entre otras cosas, debido a que no es necesario el ánimo de lucro ni tampoco haber participado en el delito previo. En este sentido, hay que señalar la diferencia terminológica que recoge Blanco Cordero<sup>5</sup> entre blanqueo y lavado. Según este autor, estaríamos ante blanqueo cuando el dinero es generado lícitamente pero fuera del control de la Administración Tributaria, el denominado «dinero negro», mientras que, si es derivado de actividades delictivas nos encontraríamos con lavado de «dinero sucio». Se trata de una diferencia terminológica de la que discrepa Abel Souto<sup>6</sup> y cuyos argumentos, en nuestra opinión, resultan concluyentes para respaldarlos frente a los de Blanco Cordero. Como señala el autor, realizar una diferenciación entre blanqueo y lavado podría llevar a equívoco y hacer pensar que en legislaciones como la nuestra ya solo porque el delito sea nombrado como blanqueo de capitales incluya, por ejemplo, dentro de su objeto a la cuota defraudada del ilícito tributario; y que, en otras legislaciones como la alemana, se excluya porque se utilice el término «lavado». Por tanto, siguiendo la doctrina mayoritaria, al referirnos a blanqueo o lavado lo hacemos de forma indistinta aludiendo al mismo fenómeno<sup>7</sup>.

Una vez aclarada la cuestión terminológica, debemos comenzar la exposición sobre el concepto del delito desde dos sentidos distintos. Como señala Blanco Cordero<sup>8</sup>, dependiendo del origen del bien que se pretende blanquear nos encontraremos ante el sentido amplio o el sentido estricto. En primer lugar, si la legitimación es de bienes de procedencia ilegal, es decir, obtenidos de forma no delictiva pero sí al margen de la Administración Tributaria, estaremos ante el blanqueo de capitales en sentido amplio. Si se refiere exclusivamente a la reconversión de bienes de origen delictivo, estaríamos ante el sentido estricto del delito de

<sup>1</sup> Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que reforma la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que puso en vigencia el Código Penal de 1995 (BOE, núm. 152, de 23/06/2010).

<sup>2</sup> En Estados Unidos «*money laundering*»; en Francia se prefiere hablar de «*blanchiment de l'argent*»; «*Geldwäsche*» es la expresión utilizada en Alemania.

<sup>3</sup> BLANCO CORDERO, I., *El delito de blanqueo de capitales*, 4.ª ed., Pamplona (Aranzadi), 2015, p. 98.

<sup>4</sup> VIVES ANTÓN, T. S. y GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *Comentarios al Código penal de 1995*, vol. II, Valencia (Tirant lo Blanch), 1996, p. 146.

<sup>5</sup> BLANCO CORDERO, I., *El delito de blanqueo de capitales*, cit., p. 99.

<sup>6</sup> ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional: especial referencia a los aspectos penales*, Santiago de Compostela (Universidad de Santiago de Compostela), 2002, pp. 28-29.

<sup>7</sup> DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., «Blanqueo de capitales», en *Memento Práctico Penal 2017*, Madrid (Francis & Taylor), 2017, p. 1338.

<sup>8</sup> BLANCO CORDERO, I., *El delito de blanqueo de capitales*, cit., p. 103.

blanqueo. Es la naturaleza de este último la que hace necesaria la intervención del derecho penal.

Por tanto, asumiendo que es el sentido estricto el de interés para el derecho penal, ahora sí podemos dar una definición analítica de este delito. La doctrina entiende de forma consensuada como blanqueo «el proceso o conjunto de operaciones mediante el cual los bienes o el dinero resultantes de actividades delictivas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico o financiero»<sup>9</sup>.

De esta definición obtenemos los siguientes elementos. En primer lugar, se trata de un *proceso*. Por tanto, no es un acto aislado por el que los bienes pasen a tener apariencia legítima, sino un proceso dividido en fases<sup>10</sup>, donde se oculta su procedencia o destino, para simular su auténtica naturaleza y conseguir poder disfrutar de los bienes sin levantar sospechas de su origen. El propio legislador reconoce en las conductas típicas contenidas en los artículos 301.1 y 301.2 CP que es un proceso de *ocultación*, como indica el elemento subjetivo del apartado 1 «(...) para ocultar o encubrir su origen ilícito», y en el apartado 2, el acto típico de «ocultación o encubrimiento». Blanco Cordero hace especial referencia al objeto que se oculta, encuadrándose dentro de la doctrina mayoritaria que considera que el fin del blanqueo es ocultar el origen de los bienes.

Las fases de este proceso, según el GAFI<sup>11</sup> son: colocación, enmascaramiento e integración. Este informe no tiene carácter vinculante, pero nuestro alto tribunal ha optado también por reconocer que el proceso del fenómeno del blanqueo está compuesto por estas tres fases, recogidas en la STS 156/2011, de 21 de marzo, FJ 2. El ponente de esta sentencia D. Joaquín Giménez García destaca en el motivo sexto que: «el delito de blanqueo de capitales se vertebraba en tres fases sucesivas y enlazadas. La primera fase está constituida por la colocación de los capitales en el mercado. La segunda consiste en una técnica de distracción para disimular su origen delictivo. La tercera es la reintegración en virtud de la cual el dinero, ya blanqueado vuelve a su titular».

Como se señala, el último elemento del concepto es la *integración*<sup>12</sup>, conseguida a través de la apariencia final de legitimidad, que gracias a ella le permite dar una explicación de la naturaleza de los bienes y así poder reintegrarlos al tráfico económico legal. Consideramos que este es el elemento fundamental del concepto de blanqueo de capitales frente a lo que piensa una parte de la doctrina, que considera los actos de ocultación para dotar de apariencia legal a los bienes como el elemento central del concepto. Por ejemplo, Fabián Caparrós hace referencia al blanqueo como: «el proceso a través del cual se dota de apariencia legítima a unos bienes –con independencia de cuál sea la forma que adopten: muebles

<sup>9</sup> DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El blanqueo de capitales en el Derecho Español*, Madrid (Dykinson), 1999, p. 5.

<sup>10</sup> DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., «Blanqueo de capitales», cit., p. 1339.

<sup>11</sup> GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE, *Rapport sur la Lutte contre le blanchiment de capitaux*, Annexe 2, *Collection des rapports officiels*, París 1990, p. 91.

<sup>12</sup> DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., «Blanqueo de capitales», cit., p. 1339.

o inmuebles, tangibles o intangibles, etc.— procedentes de actividades criminales»<sup>13</sup>. Sin embargo, esta opinión provoca cierta inseguridad jurídica, pues de nada vale dotar a estos bienes de apariencia legal si no se incorporan al sistema económico para disponer de ellos, finalidad prioritaria para el disponente.

## 2. Bien jurídico protegido

Sentado todo lo expuesto en el apartado anterior, la referencia a la agregación de los bienes al orden socioeconómico legal nos lleva a destacar otro de los problemas más discutidos por la doctrina, como es el bien jurídico protegido; ya que, como señaló Vives Antón, su lesión es «el primer momento justificativo de la injerencia penal en la libertad»<sup>14</sup>.

Un repaso a la doctrina nos revela dos configuraciones predominantes: una se encamina a la protección de la Administración de Justicia y la otra a la tutela del orden socioeconómico.

Frente a estas dos corrientes, se enfrenta la tesis de Bajo Fernández, que considera que el blanqueo es una actividad irrelevante para el interés del derecho penal y que no solo no da lugar a tipificación alguna, sino que debe ser reconducida ya que permite la reincorporación a la legitimidad de los bienes sustraídos del control fiscal<sup>15</sup>. Este punto de vista tiene su explicación en que el autor defiende un concepto de blanqueo mucho más extenso, considerando el sentido amplio del blanqueo parte del interés del derecho penal. Así lo evidencia la definición del autor: «por blanqueo de dinero entendemos una estratagema por la que un sujeto poseedor de dinero sustraído al control de las Haciendas públicas, lo incorpora al discurrir de la legitimidad, ocultando la infracción fiscal implícita y, en su caso, el origen delictivo de la riqueza». Por ello, ve de forma positiva la reintegración, ya que ahora van a estar de nuevo los bienes fiscalizados y controlados, por lo que el Estado puede aprovecharse de ellos.

Este autor ha sido criticado por no distinguir entre dinero negro y sucio<sup>16</sup>, ya que para el fenómeno del dinero negro existen métodos como la regularización fiscal para reintegrarlos al tráfico económico y con el dinero sucio esto no es posible. En especial, como señala Palma Herrera no debe confundirse el interés recaudatorio del fisco con el bien jurídica-

<sup>13</sup> FABIÁN CAPARRÓS, E., «Relaciones entre el blanqueo de capitales y corrupción. Algunas valoraciones a propósito de las previsiones contenidas en la convención de la OCDE sobre soborno de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (1997)», en FERRÉ OLIVÉ, J.C. (ed.), *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario. Delitos financieros, fraude y corrupción en Europa*, vol. II, Salamanca (Ediciones de la Universidad de Salamanca), 2002, p. 104.

<sup>14</sup> VIVES ANTÓN, T. S., *Fundamentos del Sistema penal*, 1.ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 1996, p. 484, nota 71.s.

<sup>15</sup> BAJO FERNÁNDEZ, M. y BACIGALUPO SAGGESE, S., *Derecho penal económico*, 2.ª ed., Madrid (Ceura), 2010, pp. 714 y ss.

<sup>16</sup> FABIÁN CAPARRÓS, E., *El delito de blanqueo de capitales*, Madrid (Colex), 1998, p. 64, nota 106.

mente protegido, que es justamente que esas ganancias no entren en el sistema económico y empiecen a tributar como legítimas, ya que el Estado está obligado a proteger la libre y leal competencia en el mercado de los efectos anticompetitivos que genera la incorporación en su seno de capitales de origen delictivo<sup>17</sup>.

Por tanto, hay que analizar el blanqueo desde el daño que puede causar a la sociedad y no solo desde una visión económica donde puede tener más inconvenientes que ventajas su tipificación.

Una vez sentado que el blanqueo sí que merece un juicio negativo, hay que analizar la discusión doctrinal sobre cuál es el *bien protegido*, teniendo en cuenta que debemos distinguir entre bien jurídico y la *ratio legis* de la norma. El primero es definido como «todo aquello que, desde un punto de vista del orden social, aparece como un valor positivo y, precisamente por ello, goza de la protección del derecho»<sup>18</sup> y la segunda es la finalidad objetiva de la norma. No se deben confundir estos dos conceptos pese a que la concepción teleológica del tipo los una. Por lo tanto, el bien jurídico es la representación de la función político-social de la norma y justifica su existencia. Es el componente primario y motriz de la *ratio*, que será la exteriorización de la voluntad del legislador, de los objetivos político-criminales que llevan a este a incriminar una conducta. Esta distinción es fundamental ya que, como veremos más adelante, cuando analicemos los actos neutrales en relación con el blanqueo de capitales, si acudimos al bien jurídico para intentar delimitar el tipo del blanqueo, nos lleva a soluciones incompletas y problemáticas, siendo preferible acudir a la *ratio legis*, lo cual no quiere decir que no exista bien jurídico protegido.

Retomando la discusión sobre las dos configuraciones enfrentadas, una parte de la doctrina concibe la Administración de Justicia como el bien jurídico protegido y se basa en que estamos ante una colaboración posterior, ante una conducta encubridora, en la que se trata de obstaculizar el conocimiento de la Administración de Justicia del delito previo cometido.

Sin embargo, la idea de considerar a la Administración de Justicia como único bien jurídico no resulta del todo completa, ya que, si recordamos los tres elementos del blanqueo, esta corriente solo se ocupa de los dos primeros, olvidando la integración, calificada previamente como criterio determinante en la conceptualización de este delito. Además, basar este ilícito en esta protección, no lo distinguiría mucho del encubrimiento, que ya protege las lesiones contra la Administración de Justicia.

Así se mantiene por otra parte de la doctrina, como decíamos, la interpretación de que el bien protegido es el orden económico, sosteniendo su pensamiento en una interpretación sistemática del CP, donde ya en el anteproyecto de 1992 se señalaba que este era un delito que agredía «genuinamente» al orden socioeconómico. Más tarde, en el código de 1995,

<sup>17</sup> PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, Madrid (Edersa), 2000, pp. 274-275.

<sup>18</sup> RODRIGUEZ MOURULLO, G., *Derecho penal, Parte General*, Madrid (Civitas), 1977, pp. 276-277.

se introdujo dentro de los delitos contra el orden económico en el título XII. Esta visión abarcaría todas las fases del blanqueo.

Sin embargo, como bien señala Martínez-Buján, «el orden económico no sirve para designar, en rigor, un bien jurídico directamente protegido en sentido técnico, ni siquiera en el caso de los delitos económicos en sentido estricto. De ahí que, a los efectos de interpretar la figura del blanqueo, resulten insuficientes las meras referencias a dicho orden sin mayores especificaciones»<sup>19</sup>.

Por tanto, dentro de esta corriente doctrinal, se dividen los autores en varias posturas para determinar el bien jurídico técnico protegido dentro de este orden socioeconómico. Para un sector doctrinal, *la libre competencia* sería este bien jurídico, ya que contar con un flujo de bienes al simple coste de la comisión de delitos permite lograr fácilmente posiciones monopolísticas dañando el acceso a la economía lícita en igualdad de condiciones<sup>20</sup>. Esta postura de la protección de la libre competencia no es aceptada entre otros por Martínez-Buján o Díaz-Maroto, pues para este otro sector doctrinal se estaría protegiendo la *licitud de los bienes en el tráfico financiero y económico legal*, interpretación a la que nos sumamos, ya que la protección de la libertad del tráfico contra los productos de origen ilícito es una condición esencial para la economía de mercado<sup>21</sup>. Y ello por tres razones: en primer lugar, porque creemos que los blanqueadores no buscan obtener una posición de monopolio, sino solamente disponer pacíficamente de los bienes sin levantar sospechas, cosa que en una posición de monopolio difícilmente sería imaginable; en segundo lugar, debido a que los costes en los que se incurren no tienen por qué ser menores, ya que habitualmente se soporta el coste de empresas deficitarias, solo útiles para el blanqueo; y por último, porque las conductas de blanqueo afectan de la misma manera a la competencia que los pactos colusorios, pero la inexistencia de una protección penal global nos muestra que si este fenómeno vulnerase exclusivamente la concurrencia nada explicaría que la punición solo se centrara en el blanqueo y no en todas las conductas que afectan de la misma manera que este<sup>22</sup>.

No obstante, hay que tener en cuenta que la letra de la ley actual, muy semejante al anterior artículo 344 bis h), sigue definiendo el delito de un modo más inclinado a la protección de la Administración de Justicia y también que la gravedad de las penas no puede ser explicada solo con base en la lesión del orden socioeconómico<sup>23</sup>, esto explica que tampoco resulte del todo satisfactoria esta tesis.

<sup>19</sup> MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa, parte especial*, 5.ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015, p. 565; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El blanqueo de capitales en el Derecho Español*, cit., p. 14; entre otros.

<sup>20</sup> BLANCO CORDERO, I., *El delito de blanqueo de capitales*, cit., p. 324.

<sup>21</sup> MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa, parte especial*, cit., p. 565.

<sup>22</sup> ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional: especial referencia a los aspectos penales*, cit., pp. 335-338.

<sup>23</sup> MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa, parte especial*, cit., p. 564.

Tras todo lo señalado, no podemos coincidir con que el bien jurídico se agota exclusivamente ni en la protección de la Administración de Justicia ni en la del orden socioeconómico. En nuestra opinión, estamos ante un delito «pluriofensivo» que protege el correcto funcionamiento tanto de la Administración de Justicia como del tráfico económico y financiero legal, entendiéndose este cual concreción del orden socioeconómico.

Para completar la visión sobre esta intrincada problemática, no debemos dejar de analizar la tesis de Fernando Molina. El autor se aproxima al problema del bien jurídico de una manera diferente, y más original, al apoyar su tesis en tres cuestiones de la teoría general del delito: la teoría del bien jurídico, la del *inter criminis* y la de la participación.

Todo ello para justificar que el blanqueo es un delito pluriofensivo. Por un lado, afecta a la administración de justicia, de la misma manera que lo hace el encubrimiento, ya que en ambos casos se impide el conocimiento del delito original, provocando que no se puedan cumplir los fines de la pena y, por tanto, frustrando los sentimientos de justicia y la prevención de futuros delitos. Por otro lado, se lesionarían los bienes jurídicos pertenecientes a los delitos de los que procede el dinero blanqueado y de los que se cometan con dinero blanqueado. Esto es debido a que el autor entiende que el blanqueo es una participación amplia tanto en los delitos previos como en los delitos posteriores cometidos con dinero blanqueado, porque con el blanqueo se crea un clima de favorecimiento de comisión de delitos debido a la existencia de un mercado que ofrece una expectativa de poder lucrarse de los bienes y de financiar los delitos posteriores con el dinero blanqueado<sup>24</sup>.

Coincidimos con esta teoría en que, efectivamente, el blanqueo es un delito pluriofensivo, pero no se protegen los bienes jurídicos de los delitos previos, ya que la existencia del propio mercado no es por sí sola la que provoca la clara expectativa de lucrarse con los delitos o de financiar los delitos posteriores, que es más simple con dinero sin blanquear, como expresa el propio autor<sup>25</sup>. Lo que aquí genera el blanqueo es el daño al sistema socioeconómico mediante la introducción de capitales delictivos, que influyen de manera negativa en el mercado, viciándolo. Por ejemplo, perdiendo la confianza en él o el prestigio de sectores propensos al blanqueo.

La determinación del bien jurídico tiene una gran importancia respecto del núcleo de la obra, como son los actos neutrales, así como la diferencia entre *ratio legis* y bien jurídico protegido. Se vuelven ambas indispensables para poder realizar una adecuada restricción del tipo, como veremos más adelante. A esta cuestión sobre la posible inclusión como típicos de los actos neutrales, nos dedicaremos de ahora en adelante tras este resumen de la tipificación del delito de blanqueo de capitales en nuestro país.

<sup>24</sup> MOLINA FERNÁNDEZ, F., «¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: Reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la “participación” en el delito», en *Política criminal y blanqueo de capitales*, Madrid (Marcial Pons), 2009, pp. 117-123.

<sup>25</sup> MOLINA FERNÁNDEZ, F., «¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: Reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la “participación” en el delito», cit., p. 119.



### III. ACTOS NEUTRALES

#### 1. Concepto

La moderna teoría del delito se caracteriza por reelaborar los conceptos que rigen el sistema penal. De este modo, a principios de siglo se consideraba que, si una acción se podía subsumir dentro del tipo, aunque solo fuese de manera formal, ya se consideraba como típica. Ahora ya no solo es necesario que se dé esa mera subsunción, sino que, además, se añade a la tipicidad el elemento teleológico que provoca que la conducta deba ser peligrosa o dañina para el bien jurídico<sup>26</sup>.

Ello genera la creación de uno de los debates doctrinales y jurisprudenciales más importantes de los últimos tiempos. Se trata de la discusión sobre si acciones normales, diarias, propias de negocios estándar, que se ofrecen dentro del mercado a cualquier cliente que las solicita, pueden llegar a ser penalmente típicas, por crear un riesgo jurídicamente desaprobado que dañe, como decíamos, el bien jurídico.

Estas acciones sobre las que se discute son los conocidos como «actos neutrales». La doctrina alemana se ha venido pronunciando en este sentido. Ya Welzel resaltó la atipicidad de aquellas, debido a que se producen dentro del marco del orden social y dentro de una gestión ordenada y las conductas que merecen un reproche penal son las que se apartan gravemente de los órdenes de la vida social. Hassemer sigue una misma línea indicando que son acciones diarias que se encuentran dentro de la libertad general de acción y que tienen una apariencia externa no delictiva, pese a que se puedan incluir dentro de un tipo penal.

Para ilustrar esto, vamos a recurrir al conocido ejemplo de Jakobs, en el que parece claro que el panadero que vende una barra que luego el comprador envenena para matar a su esposa, no puede ser condenado como partícipe de este asesinato. Pero más dudoso parece cuando al panadero le añadimos una información extra: que tenía conocimiento de que la barra de pan se utilizaría para matar a la esposa. Por ello, otra parte de la doctrina alemana no comparte que se pueda excluir la punibilidad de estas acciones neutrales de forma general, sino que habrá que estar al análisis de si el conocimiento nos revela una contribución con sentido delictivo para determinar su tipicidad, como señala Roxin<sup>27</sup>.

La doctrina anglosajona también ha abordado el problema aquí tratado, pero recurriendo mayoritariamente a criterios subjetivos para restringir la punibilidad de este tipo de acciones. Dicha doctrina ha centrado la cuestión en la punibilidad de la venta de bienes normalmente comercializables –*ordinary marketable commodity*–. Los tribunales, al igual que la doctrina mayoritaria, restringen la punibilidad con base en el conocimiento que tenga

<sup>26</sup> BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva: las acciones neutrales y la cooperación en el delito*, Granada (Comares), 2003, p. 1.

<sup>27</sup> Recogidas todas ellas en BLANCO CORDERO, I., «Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales», en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, vol. 50, 1997, pp. 264-267.

el vendedor de la actuación que vaya a realizar posteriormente el comprador de este tipo de bienes. Si tenía dicho conocimiento antes de la venta y transmite la propiedad del bien, será una acción típica; por el contrario, si adquiriese dicho conocimiento después de transmitir la propiedad, pero antes de su entrega no sería un comportamiento culpable<sup>28</sup>. Esta solución a la que llegan los tribunales, en casos como *National Coal Baird v. Gamble*, es criticada por la doctrina mayoritaria, en especial por Smith y Hogan, que la califican de poco satisfactoria<sup>29</sup> ya que la distinción realizada por los tribunales es propia del derecho civil. Para los autores, no debe hacerse responsable al vendedor en función de la transmisión de la propiedad sino en función de la entrega del bien y de si adquirió el conocimiento de que dicho bien iba a ser utilizado para cometer un posterior delito antes o después de entregar el bien al comprador, siendo culpable cuando el conocimiento sea anterior a la entrega del bien<sup>30</sup>. Otra parte de la doctrina discute esta solución y aboga por no considerar nunca culpable al vendedor en este tipo de actuaciones, ya que supondría una extensión excesiva de la responsabilidad penal, al hacer garante al vendedor de la actuación posterior del comprador<sup>31</sup>.

No solo la doctrina extranjera se ha ocupado de este asunto, también nuestra doctrina, que de una manera parecida se basa en la teoría de la imputación objetiva para fundamentar la exclusión de la tipicidad.

En primer lugar, Feijoo Sánchez<sup>32</sup> acude al principio de prohibición de regreso, exponiendo que no podrá ser punible una acción que tiene un sentido externo distinto del de favorecer un delito. La conducta que tiene un sentido social propio no puede ser objeto del derecho penal, siendo solo punible la que tiene como único sentido objetivo cooperar con el delito. Una vez sentado esto, entra en juego el principio de prohibición de regreso, según el cual, aunque se actúe favoreciendo el delito, no será punible esta participación cuando no haya datos objetivos que hagan pensar que el tercero ha decidido ejecutar el delito cuando se realiza dicho favorecimiento. Por ello, según el autor cuanto más objetivada esté la realización del tipo, más difícil será distanciarse de la tipicidad<sup>33</sup>.

Por otro lado, Cerezo Mir<sup>34</sup> excluye la tipicidad con base en el principio de confianza. En consecuencia, para dicho profesor, si no conoció o no pudo conocer el deseo del autor de cometer el delito, su acto será atípico. Será López Peregrín quien busque una solución a través del riesgo permitido. Para esta autora, pese a que la conducta realizada suponga la

<sup>28</sup> SMITH, J. y HOGAN, B., *Criminal Law*, 14.<sup>a</sup> ed., Oxford (Oxford University Press), 2015, p. 228.

<sup>29</sup> SMITH, J. y HOGAN, B., *Criminal Law*, cit., p. 228.

<sup>30</sup> SMITH, J. y HOGAN, B., *Criminal Law*, cit., pp. 228-229.

<sup>31</sup> WILLIAMS G., *Criminal Law: The General Part*, 2.<sup>a</sup> ed., Londres (Stevens & Sons), 1961, p. 124; WILLIAMS G., *Textbook of Crime Law*, 1.<sup>a</sup> ed., Londres (Stevens & Sons), 1978, pp. 293-294.

<sup>32</sup> FEIJOO SÁNCHEZ, B., *Límites de la participación criminal ¿Existe una prohibición de regreso como límite general del tipo en el derecho penal?*, Bogotá (Universidad Externado de Colombia), 1999, pp. 56 y ss.

<sup>33</sup> FEIJOO SÁNCHEZ, B., *Límites de la participación criminal ¿Existe una prohibición de regreso como límite general del tipo en el derecho penal?*, cit., p. 73.

<sup>34</sup> CEREZO MIR, J., *Curso de derecho penal español, Parte General, II. Teoría jurídica del delito*, 6.<sup>a</sup> ed., Madrid (Tecnos), 1998, p. 172.

creación de un riesgo para el bien jurídico, no será penalmente desvalorada, independientemente del grado de conocimiento que se tenga del plan delictivo si es socialmente útil, ya que es una conducta necesaria con un sentido en sí mismo; esta utilidad social es la que inspira el riesgo permitido<sup>35</sup>.

Por último, Gómez Tomillo hace referencia al sentido delictivo de la cooperación. Considerando punible la cooperación causal que se concreta en la producción del resultado, es decir, la cooperación que posea un contenido jurídicamente desaprobado que se materialice en el daño, será la cooperación penada<sup>36</sup>. En otras palabras, la que sin ella no se hubiese realizado el delito.

Nuestro alto tribunal se ha hecho eco de esta cuestión, y en su STS 974/2012, de 5 de diciembre, FJ 8º, nos presenta los «actos neutrales» como aquellos que son «insuficientes para erigir el comportamiento de su autor en forma participativa criminalizada bajo el título de cooperación necesaria», recordando su pronunciamiento de la STS 1300/2009, de 23 de diciembre. Recogiendo la jurisprudencia anterior: «en el marco de nuestra jurisprudencia, hemos abordado aspectos de esta cuestión al referirse al significado causal de acciones cotidianas respecto del hecho principal (STS 185/2005 –RJ 2005, 4970–), a la del gerente de una sucursal bancaria y a la intermediación profesional de un abogado en operaciones bancarias (STS 797/2006 –RJ 2006, 8412–) y a la participación de operarios que realizaron trabajos de su oficio que sirvieron para acondicionar un vehículo empleado en el transporte de droga (STS 928/2006 –RJ 2007, 29–)», nos señala que perderán el carácter de neutral cuando «la acción de colaboración tenga un sentido objetivamente delictivo y que ello sea conocido por el que realiza una acción que, en principio, es socialmente adecuada». Por tanto, para el Tribunal Supremo conviene conocer como actos neutrales: «aquellos cotidianos de los que se puede predicar que, siendo socialmente adecuados, no cabe tenerlos por “típicos” penalmente. Y no lo son porque, con independencia del resultado, esos actos no representan un peligro socialmente inadecuado». Esto ya lo muestra en su STS 34/2007, de 1 de febrero, al indicar que: «una acción que no representa peligro alguno de realización del tipo carece de relevancia penal. El fundamento de esta tesis es la protección del ámbito general de libertad que garantiza la Constitución».

La STS 942/2013, de 11 de diciembre, FJ 4º, basándose en la anterior jurisprudencia, nos da una definición que nos va a servir de referencia para el resto del trabajo al decir que los actos neutrales «son conductas causales desde un punto de vista natural, pero que, en tanto que pueden estar amparadas en su adecuación social, pueden no suponer un peligro (o un aumento del peligro) jurídicamente desaprobado para el bien jurídico, y, en esa medida, no resultar típicos».

<sup>35</sup> LÓPEZ PEREGRÍN, M. C., *La complicidad en el delito*, Valencia (Tirant lo Blanch), 1997, pp. 272-273.

<sup>36</sup> GÓMEZ TOMILLO, M., *Libertad de información y teoría de la codeinencia. La autoría y la participación en los delitos cometidos a través de los medios de comunicación*, Granada (Comares), 1998, p. 434.

## 2. Problemática en el blanqueo de capitales

Dentro del blanqueo de capitales existe el mismo problema respecto a este tipo de conductas, pero en este caso no en los tipos de participación sino en el marco de la autoría. Ello se debe a que el propio delito en sí es la tipificación independiente de una participación post-delictiva. Los problemas aparecen por la redacción del artículo 301.1 del CP, que parece sancionar dos conductas independientes, como resulta evidente si realizamos una interpretación literal del precepto, valoramos los antecedentes legislativos y tenemos en cuenta la voluntad del legislador. Por tanto, tienen cabida en el artículo, en primer lugar, todos los actos de adquisición, posesión, conversión y transmisión que se realicen con conocimiento del origen delictivo de los bienes y; en segundo lugar, todos los actos indeterminados realizados con la finalidad de ocultar, encubrir o auxiliar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones para eludir las consecuencias legales de sus actos<sup>37</sup>.

Por ello, con esta redacción, no cabe duda de que quedan incluidas conductas como la de adquirir bienes de procedencia delictiva para ejecutar un plan de ocultación de los mismos o la de trasladar dinero sucio a un paraíso fiscal, que tienen una clara vocación blanqueadora. Pero también, esta amplísima redacción incluye los anteriormente mencionados actos neutrales, en los que existen dudas de si deben ser objeto de sanción pese a tener conocimiento del origen delictivo, ya que se realizan dentro de los estándares sociales. Ejemplos de ello serían conductas como la recepción de dinero de un panadero por parte de un narcotraficante por la venta de pan, la de un abogado por sus servicios o, más llamativo aún, la utilización de la piscina de un narcotraficante cuando se conoce que se construyó con dinero procedente del narcotráfico.

Es evidente que una construcción así necesita una interpretación restrictiva, a fin de que no se vea comprometido el contenido esencial de los derechos fundamentales económicos del ciudadano relativos a la participación en el tráfico de bienes y servicios, al someterle a un riesgo muy elevado de punibilidad<sup>38</sup>. De no ser así, se estaría ante un tipo que nos acerca al derecho penal del enemigo, en el que se considera al ciudadano un riesgo para la seguridad<sup>39</sup>, no sancionándose solo los actos de blanqueo, sino todos los que quiebren ese aislamiento social del delincuente. Dado que la única vía de restricción que muestra la letra del artículo es el conocimiento del origen de los bienes, no resulta suficiente para resolver todos los casos, sobre todo en aquellos en el que desconocimiento es difícilmente defendible, como el

<sup>37</sup> MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa, parte especial*, cit., p. 575. En el mismo sentido, BLANCO CORDERO, I., *El delito de blanqueo de blanqueo de capitales*, cit., p. 606; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., «El blanqueo de capitales y su regulación en España», *Doctrina y Jurisprudencia Penal*, núm. 26, 2016, p. 15.

<sup>38</sup> BLANCO CORDERO, I., «Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales», cit., p. 290.

<sup>39</sup> BLANCO CORDERO, I., «Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales», cit., p. 291.

caso del abogado que defiende al narcotraficante. En estos casos, de aceptar su punibilidad, podrían afectar a derechos fundamentales y al propio funcionamiento del proceso penal<sup>40</sup>.

Sentada la necesidad de una interpretación restrictiva, vamos a analizar los intentos de la doctrina y la jurisprudencia por delimitar en qué casos esos actos neutrales sí que se deben considerar como una acción de blanqueo.

### 3. ¿Cuándo un acto «neutral» puede constituir una acción de blanqueo?

La doctrina se encuentra dividida en dos vías de restricción del tipo. En primer lugar, vamos a analizar los fundamentos que dan los partidarios de excluir la tipicidad de las acciones con base en el tipo objetivo.

Un primer intento de limitar el tipo fue considerar que, mientras las conductas llevadas a cabo se muevan dentro del rol social normal y de los límites de la gestión ordenada, no podrán ser calificados como actos típicos. Este intento de considerar conductas *per se* neutrales no resulta del todo eficaz por su gran indeterminación<sup>41</sup> y porque cualquier conducta puede adquirir sentido delictivo si se dan una serie de condiciones. Por tanto, no se pueden considerar neutrales por defecto ni tan siquiera los actos estándar inherentes al ejercicio de una profesión<sup>42</sup>. Esta solución nos llevaría a absolver, por ejemplo, al transportista que dentro de su actividad profesional se dedica a transportar cantidades de dinero a paraísos fiscales.

Otro de ellos sería a través del principio de insignificancia exigiendo delimitar un valor de los bienes blanqueados, que, de no superarlo, conllevaría la atipicidad de las conductas *per se*. Esta visión ha recibido varias críticas, en primer lugar, desde una versión político-criminal, sería inútil, ya que los blanqueadores para evitar el castigo, recurrirían a los actos de *structuring*, dividiendo en pequeñas porciones los bienes blanqueados, además de la gran indeterminación que provoca, ya que es muy complicado poder precisar cuál es límite económico a partir del cual la conducta es típica<sup>43</sup>.

Otros, directamente, asumen la tipicidad de todas las conductas expuestas en el artículo 301.1 del CP, menos la del abogado, basándose en la eximente del artículo 20.7 del CP, ya que el abogado estaría en el ejercicio de un derecho, oficio o cargo. Pero esta solución provoca más dudas de las que resuelve, ya que la ambigüedad del área de acción de esta eximente

<sup>40</sup> RAGUÉS I VALLÈS, R., «Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo de capitales», en SILVA SÁNCHEZ, J.M. (dir.), *¿Libertad económica o fraudes punibles?*, Madrid (Marcial Pons), 2003, p. 131.

<sup>41</sup> BLANCO CORDERO, I., «Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales», cit., p. 277.

<sup>42</sup> PÉREZ MANZANO, M., «Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales», en BAJO FERNÁNDEZ, M. y BACIGALUPO SAGGESE, S. (eds.), *Política criminal y blanqueo de capitales*, Madrid (Marcial Pons), 2009, p. 173.

<sup>43</sup> PÉREZ MANZANO, M., «Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales», cit., p. 187.

no da respuesta a si, precisamente, el ejercicio legítimo de la profesión de abogado provoca la atipicidad del cobro de honorarios sabiendo la procedencia delictiva de los mismos<sup>44</sup>.

La mayoría de la doctrina, para poder dar una respuesta razonada sobre la punibilidad de los actos neutrales, basa sus teorías en el fin de protección de la norma.

Ragués i Vallès es uno de los máximos exponentes de este concepto en la doctrina española al poner de manifiesto los problemas que ocurren al recurrir al bien jurídico. En primer lugar, analiza la postura de la mayoría de la doctrina, que apuesta por el orden socioeconómico como bien jurídico protegido, de forma que las únicas acciones que deben ser consideradas blanqueo son las que suponen una alteración de dicho orden. Pero, como podemos comprobar, la afectación a este bien rara vez se produce por actos aislados que, aun así, sí que son merecedores de pena (como la salida de capitales delictivos a paraísos fiscales) y observamos que en ninguna sentencia se hace alusión al comprobado impacto económico de ello<sup>45</sup>. Para salvar este problema sin renunciar al bien jurídico, debemos, o bien conformarnos con solo sancionar aquellas conductas que verdaderamente afectan al bien jurídico, dejando casi sin utilidad este tipo, o bien, pasar a considerar el blanqueo como un delito de acumulación en el que lo importante es el daño acumulado que cada acción va causando. La primera opción deja sin margen al tipo del blanqueo y la segunda lo convierte en un tipo con una nula capacidad de delimitar los supuestos sancionados<sup>46</sup>.

Si pensamos que el bien jurídico protegido es el del delito previo, ello nos ofrece otro resultado confuso, que se basa en la teoría del mantenimiento. Por lo tanto, esta teoría solo sancionaría la comisión de conductas blanqueadoras que provoquen que sea más complicado que se dé el reintegro a su legítimo propietario. No obstante, empíricamente es complicado demostrar que sea más difícil recuperar el bien cuando es objeto de transmisión que cuando lo guarda cuidadosamente su propietario. Además, en bienes colectivos, falla porque las conductas que pueden realizarse después con los bienes que provienen de un acto de narcotráfico difícilmente van a suponer el menoscabo del bien jurídico del delito previo, como es, por ejemplo, la salud pública<sup>47</sup>.

Debido a todo esto, el autor llega a la conclusión de que la tipificación del blanqueo es un instrumento político criminal que refuerza la pena prevista para los delitos previos y, por tanto, en el blanqueo de capitales no se protege ningún bien jurídico, sino que solo se completa la pena del delito previo para una mayor disuasión, *ex ante*, del autor.

<sup>44</sup> RAGUÉS I VALLÈS, R., «Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo de capitales», cit., p. 146.

<sup>45</sup> RAGUÉS I VALLÈS, R., «Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo de capitales», cit., p. 143.

<sup>46</sup> RAGUÉS I VALLÈS, R., «Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo de capitales», cit., p. 149.

<sup>47</sup> RAGUÉS I VALLÈS, R., «Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo de capitales», cit., pp. 149-150.

Una vez dejado claro cuál es fundamento de la prohibición para Ragués i Vallès, este autor procede a formular el siguiente criterio delimitador: «solo está justificado que una conducta se castigue como constitutiva de blanqueo si, para un potencial infractor, la posibilidad de contar con ella *ex post* puede valorarse como un incentivo para realizar el delito previo que disminuye de forma relevante la capacidad disuasoria de la pena prevista para dicho delito»<sup>48</sup>. Queda claro aquí que uno de los grandes incentivos para la realización del hecho previo es el incremento patrimonial que este generara, el cual se ve amenazado por la sanción del blanqueo, y que solo quedara consolidado con acciones post-delictivas que tiendan al mantenimiento de las ganancias, esto es, actos de ocultación y encubrimiento que las desvinculan del origen delictivo.

En conclusión, serán punibles los actos que, a través de la ocultación del origen, generen la consolidación de las ganancias en el patrimonio. Por tanto, la prestación de servicios o la venta de objetos que, pese a suponer una transformación de los bienes de la infracción previa, no generen dicho efecto de ocultación se deben considerar actos neutrales, porque en nada ayudan a que se consolide la capacidad económica, ya que no aleja la amenaza penal de esta. Por ello, la venta de pan por parte del panadero debe considerarse atípica. Lo mismo se predica de las acciones de ocultación de muy escasa cuantía, porque ni servirán de motivación *ex ante* para el autor, ni tampoco consolidarán la riqueza de este<sup>49</sup>.

Gran aceptación ha tenido esta teoría, a la que se han sumado varios autores<sup>50</sup>, entre ellos destacadamente Pérez Manzano. La autora coincide con Ragués en que no debe olvidarse el carácter instrumental del blanqueo respecto del delito previo. Debido a esto, critica que se les dé un sentido subjetivo a las expresiones «para ocultar o encubrir» o «para ayudar»<sup>51</sup>. Para la citada autora, estos términos expresan una relación instrumental y basa en ella su interpretación restrictiva. De este modo, pone en conexión las conductas expresadas en el artículo 301.1 del CP, como lo hace la doctrina que aboga por una interpretación restrictiva del artículo desde el plano subjetivo, con las finalidades de ocultar y encubrir, pero entendidas como actos de ocultación o encubrimiento del origen delictivo de los bienes en sentido objetivo. Así consigue salvar que la tipicidad dependa de la voluntad del blanqueador y ajustarse a un derecho penal que castiga en base a hechos. Concluye la autora, que esto último, puesto en conexión con el carácter instrumental del delito que sirve para consolidar el aumento económico producido por el anterior<sup>52</sup>, generaría que solo

<sup>48</sup> RAGUÉS I VALLÈS, R., «Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo de capitales», cit., p. 154.

<sup>49</sup> RAGUÉS I VALLÈS, R., «Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo de capitales», cit., pp. 155 a 157.

<sup>50</sup> MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa, parte especial*, cit., p. 591.

<sup>51</sup> PÉREZ MANZANO, M., «Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales», cit., p. 183.

<sup>52</sup> Explicado ampliamente por RAGUÉS I VALLÈS, R., «Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo de capitales», cit., pp. 150-154.

puedan ser típicas las conductas expuestas en el artículo 301.1 del CP cuando supongan una ocultación o encubrimiento que provoque una desconexión con la conducta anterior y así la consolidación de las ganancias generadas por el delito previo<sup>53</sup>.

Por último, frente a la opinión de que deben excluirse de la tipicidad cualquier actividad en el marco de una actividad profesional socialmente lícita, debemos distinguir dos situaciones siguiendo a Pérez Manzano.

En primer lugar, cuando se trata de profesiones en las que exista una reglamentación legal sobre el blanqueo en la que el legislador establece una ponderación de los riesgos que plantea la actividad, el criterio determinante para evidenciar el aumento del riesgo permitido será la desviación o no del estándar de conducta que haya especificado el legislador y luego ese riesgo debe formalizarse en el resultado.

En segundo lugar, cuando no haya una reglamentación que pondere los riesgos, entenderemos que una conducta profesional puede llegar a ser típica en función del contexto en el que se inserte<sup>54</sup>. Para ser típica la acción debe adaptarse al plan delictivo, lo que supondrá un aumento del riesgo permitido, pero además ese aumento de riesgo se debe concretar en el resultado, por lo que, como decimos, la actividad debe suponer un acto que consolide las ganancias del delito anterior, debido a la desvinculación que provoca de su origen.

Otro sector doctrinal<sup>55</sup>, que busca delimitar el tipo a través del tipo subjetivo, propone varias soluciones. Antes de nada, debemos señalar que fundamenta su posición en que cuando concurre dolo directo, es decir, pleno conocimiento del origen delictivo de los bienes, la conducta debe ser punible. Mientras que no lo sería si solo existen meras sospechas, es decir, dolo eventual. Para ello quieren excluir el dolo eventual de la propia palabra «a sabiendas» y «sabiendo», solo considerando que admiten dolo directo y que en el resto de los casos se declare la atipicidad. Esta teoría muestra la insuficiencia de no ser capaz de explicar por qué una conducta realizada con dolo eventual debe ser atípica si es ya por la generalidad de la doctrina admitido el dolo eventual y más aún cuando el tipo castiga la imprudencia.

Por otro lado, tampoco se pueden hacer depender todas las conductas del elemento subjetivo de este artículo, consistente en el ánimo de ocultar, encubrir o ayudar, debido a que esto nos acerca a un derecho penal de la intención, ya que haría depender la punibilidad de la motivación del autor, no compatible con un estado de derecho que solo admite el castigo basado en los hechos<sup>56</sup>.

<sup>53</sup> PÉREZ MANZANO, M., «Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales», cit., pp. 184-185.

<sup>54</sup> PÉREZ MANZANO, M., «Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales», cit., p. 177.

<sup>55</sup> Recogido en BLANCO CORDERO, I., «Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales», cit., pp. 273-276.

<sup>56</sup> RAGUÉS I VALLÈS, R., «Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo de capitales», cit., pp. 144-145.



Además, otra solución nos explica que debemos distinguir dos conductas: la que puede ser realizada por cualquier persona, las acciones diarias, las de consumo; y, por otra parte, las acciones que solo un grupo específico de profesionales puede realizar, las cuales han sido objeto de regulación y de un aumento de exigencias de cuidado. Por ello, ante situaciones dudosas o sospechosas, se admitiría el dolo eventual como elemento del tipo para estos profesionales, ya que no deberían llevar a cabo el negocio por su especial deber de cuidado y se declararía la atipicidad del dolo eventual en el resto<sup>57</sup>. Esta solución no parece ser muy convincente, ya que deja en peor posición a un profesional de la banca que a un comerciante cuando objetivamente en realidad los dos están realizando la misma conducta.

Por último, de aceptar el dolo eventual, estos autores proponen un cambio legislativo que excluya explícitamente algunas conductas como las de consumo diario o de subsistencia del autor del delito previo<sup>58</sup>.

#### 4. Actos neutrales en el artículo 301.2 y 301.3 CP

En primer lugar, el delito del artículo 301.2 del CP suele ser cometido en actividades profesionales, por ejemplo, el empleado de banca que realiza un ingreso, pero que lo hace con conocimiento o sospecha de la procedencia del capital utilizado. En este caso, una conducta que jurídicamente es atípica se convertiría en típica por el conocimiento de la procedencia del dinero. Se trataría de ocultaciones manipulativas o clandestinas<sup>59</sup>.

Por lo tanto, se puede reproducir aquí la solución expresada más arriba sobre la adecuación profesional y los actos neutrales para solucionar este problema en este tipo de conductas. Las acciones del artículo 303.3 del CP siguen la misma suerte, ya que solo son la tipificación de la posibilidad del castigo imprudente de las acciones dolosas reflejadas en el artículo 301.1 del CP y no hay que olvidar que se trata de un tipo común.

#### 5. Análisis jurisprudencial

El TS, Sala 2ª, se pronunció notoriamente sobre los actos neutrales en el blanqueo de capitales en su STS 34/2007, de 1 febrero, en la que sienta varios precedentes. Aquí el Tribunal enjuicia un recurso presentado ante la condena como autor del delito del artículo 301 del CP al recurrente por cooperar, prestando su nombre, como testaferro de dos parientes con antecedentes penales por tráfico de drogas en la compra de un inmueble. En primer lugar, el

<sup>57</sup> BLANCO CORDERO, I., «Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales», cit., p. 274.

<sup>58</sup> BLANCO CORDERO, I., «Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales», cit., p. 276.

<sup>59</sup> BLANCO CORDERO, I., «Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales», cit., p. 287.

Alto Tribunal identifica la conducta ante la que estamos y considera que: «la participación en un negocio jurídico simulado, en principio, no es por sí un hecho típico ni penalmente relevante. En realidad, se lo puede considerar un acto neutral desde el punto de vista penal». Y las define como «comportamientos cotidianos, socialmente adecuados, que por regla general no son típicos». Desde este punto de partida, «una acción que no representa peligro alguno de realización del tipo carece de relevancia penal. El fundamento de esta tesis es la protección del ámbito general de libertad que garantiza la Constitución».

Por tanto, concluye el Tribunal que la exigencia para que se dé la tipicidad de estos actos es la: «realización de una acción que favorezca el hecho principal en el que el autor exteriorice un fin delictivo manifiesto, o que revele una relación de sentido delictivo, o que supere los límites del papel social profesional del cooperante, de tal forma que ya no puedan ser consideradas como profesionalmente adecuadas, o que se adapte al plan delictivo del autor, o que implique un aumento del riesgo»; y continua diciendo el TS que «en estos supuestos es necesario comprobar que la acción de colaboración tenga un sentido objetivamente delictivo y que ello sea conocido por el que realiza una acción que, en principio, es socialmente adecuada».

Por ello el Tribunal, como gran parte de la doctrina comentada en este trabajo, parece concluir que el estudio de la cuestión se debe hacer en sede de tipicidad objetiva. El Tribunal pone de manifiesto los resultados erróneos que se obtienen si la imputación se establece con base en supuestos conocimientos: «si se aplicara en tales casos la teoría subjetiva de la autoría de la participación, el acto de tomar parte en el negocio jurídico simulado como testafierro solo debería ser considerado como un acto de participación, dado que parece evidente que el testafierro no ha querido el acto como propio. Pero nuestra jurisprudencia ha rechazado, sobre todo una vez abandonada la teoría del “acuerdo previo”, la posibilidad de distinguir autoría y participación sobre la base del interés subjetivo de cada partícipe al tomar parte en el hecho».

Por todo ello analiza primero que se cumplan las exigencias de la tipicidad objetiva: «una acción como testafierro puede conllevar un ocultamiento, que, en ocasiones, puede aumentar el riesgo de comisión de un delito, como ocurre en los casos en los que se lo lleva a cabo sin una explicación objetiva plausible de la simulación, es decir, fundada en causas manifiestamente lícitas». Para una vez cumplido esto, condenar por imprudencia en base a la falta de conocimiento.

Más tarde el Alto Tribunal también tuvo la oportunidad de expresarse en cuanto a esta cuestión en la STS 942/2013, de 11 diciembre, en la que se condena a un constructor por construir una casa a la mujer de un narcotraficante o para una empresa interpuesta conociendo este la falta de ingresos legales de la mujer.

En primer lugar, el TS intenta restringir el ámbito de acción del artículo 301 del CP conectado la finalidad de ocultar, encubrir o auxiliar con todas las conductas expresadas en el artículo, por lo que además de cumplir con el tipo objetivo se deberá acreditar la vo-

luntad de activar el proceso de blanqueo: «la concreta finalidad, que es predicable tanto de “cualquier otro acto”, como de las acciones consistentes en adquirir, convertir o transmitir».

La sentencia coincide con lo expuesto en la STS 34/2007 en cuanto la definición de blanqueo y las exigencias para atribuirles relevancia penal, citando textualmente los argumentos expuestos por la anterior. En esta sentencia se desarrolla la vía que se comenzaba en la anterior STS señalando la exigencia de que se dé el conocimiento del contexto delictivo en el que se enmarca la acción, ya que como dice: «pues resulta difícil disociar absolutamente aquellos aspectos objetivos de los elementos subjetivos relativos al conocimiento de que, con la conducta que se ejecuta, que es externamente similar a otras adecuadas socialmente por la profesión o actividad habitual de su autor, se coopera a la acción delictiva de un tercero».

Por lo que el conocimiento del constructor le lleva a ser condenado: «en ese marco de conducta de los terceros, que exterioriza ya una finalidad delictiva, el recurrente aportó su profesión como constructor para facilitar el tránsito de ese dinero desde el metálico hasta su transformación en un inmueble de nueva construcción, aceptando que los pagos figuraran como realizados por una mercantil a pesar de que sabía que la obra se realizaba para el matrimonio formado por Victorino y María Consuelo, siendo ésta quien continuaba ocupándose del desarrollo de las obras. Con lo cual, llevó a cabo una conducta que contribuía a facilitar la lesión del bien jurídico mediante la ocultación del origen delictivo del dinero a través de su conversión en un bien inmueble de nueva construcción».

Esta sentencia parece abrir una vía por la cual se decanta el TS para afrontar el problema de los actos neutrales. La STS 91/2014, de 7 febrero, concuerda con la sentencia anterior, tanto en la visión restrictiva del artículo 301 del CP, como en la necesidad del autor en conocer el contexto delictivo en el que se enmarca su acción. Por ello condena a una hija que, por su proximidad familiar, al adquirir viviendas, vehículos, ingresos en cuentas corrientes y productos financieros, conocía que sus padres a través de ella, estaban procediendo a reconvertir importantes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico con evidente finalidad de ocultar su procedencia. Ocurre lo mismo en la STS 487/2014 que nada nuevo aporta a la ya reiterada jurisprudencia. En este caso se condena a un director de sucursal bancaria que conociendo que el dinero procede de delitos relacionados con la corrupción, abre una cuenta a una sociedad no residente y otras a terceros, canalizando las remesas en metálico por transferencia a otros países y colaborando en el uso del dinero y su transformación para ocultar su origen ilícito. La sentencia da por reproducidas las exigencias que se han venido exigiendo en la jurisprudencia y concluye que concurren en el caso: «el procedimiento seguido por el acusado en su trabajo profesional estaba impregnado de todas las connotaciones de opacidad y oscurantismo propias de una conducta ilegal, presentando así un áurea de ilicitud que poco tiene que ver con el ejercicio neutral de una profesión, pues todo apunta de forma patente en la línea de una conducta con un sentido punible que excluía de plano la adecuación social de su proceder por ajustarse al desempeño legítimo de la labor bancaria. Y si a ello le añadimos lo que en su momento pactó con el acusado Ce-

sáreo Maximino, de quien sabía que se trataba de un auténtico testaferro, y el conocimiento de la procedencia delictiva del dinero y de los objetivos de blanqueo que buscaban ambos hermanos». Y por tanto declara la tipicidad.

Concluimos que la jurisprudencia que se ha consolidado en los últimos años considera que las acciones que se mantengan dentro de la actividad comercial de la vida cotidiana o profesional no serán punibles, y solo lo serán cuando formen parte del plan delictivo, es decir se inserten en un contexto delictivo que haga superar los límites del papel social profesional que desarrolla, elevando el riesgo permitido. Además, será necesario que el sujeto conozca este contexto para comprobar esa colusión de voluntades entre el que realiza el a priori acto neutral y el autor del delito previo. En ese momento los actos neutrales dejan de serlo. Por ello, podría decirse que la jurisprudencia se ha alejado de los modelos de manual de los actos neutrales, ya que expone en las sentencias que, si hay conocimiento, no hay acto neutral, parece olvidar que normalmente estas conductas se dan como colaboración con conocimiento. Esto se debe a que la relación de las conductas del artículo 301 del CP con las finalidades de ocultar y encubrir las entiende de manera subjetiva.

## 6. Especial referencia a la figura del abogado

En cuanto a las acciones neutrales del abogado, nos vamos a centrar en dos frentes. En primer lugar, si el incumplimiento de las obligaciones como abogado puede dar lugar a una responsabilidad penal por blanqueo en aplicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Y, en segundo lugar, cuándo el cobro de honorarios por el abogado deja de ser una conducta neutral.

Abordando la primera cuestión vemos que la contravención de estos deberes puede constituir una ocultación de los bienes del autor del delito previo. Para ello, en primer lugar, hay que delimitar qué conductas son las que se pueden conectar con el delito por ser hábiles para llevar a cabo la ocultación, ya que el resto permanecerán atípicas, porque no colaborar con la persecución del blanqueo, no activa la responsabilidad por el tipo del blanqueo. Igualmente, el no cumplir los deberes de impedir delitos no convierte en autor de esos delitos y, por tanto, son infracciones de omisión pura que, para que exista su punibilidad, deben ser tipificados expresamente. Esto se debe al principio de autorresponsabilidad que concreta la ausencia de deberes de garante sobre otros sujetos responsables de sí mismos y evidencia atipicidad de las conductas mencionadas anteriormente. Vemos que tiene este carácter la infracción de identificar a los clientes, la de conservar documentación durante el tiempo establecido, la de informar a la administración, la de no revelar al cliente la transmisión de esa información y la de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos<sup>60</sup>. Una vez hecho esto, hay que recalcar que su simple infracción no da lugar al delito de blanqueo, solo se

---

<sup>60</sup> PÉREZ MANZANO, M., «Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales», cit., p. 203.

producirá tal si esta acción cumple con los requisitos de la tipicidad objetiva ampliamente expuestos, es decir, si la infracción supone una ocultación que desvincula los bienes de su origen provocando la consolidación de la riqueza del autor.

Los mismo se debe predicar del cobro de honorarios por parte del abogado, conociendo el origen de ellos. Por lo tanto, la cuestión también se debe resolver desde la tipicidad objetiva. Por ello, debemos concluir que el cobro de honorarios realizado dentro de la normalidad de las prácticas habituales nunca dará lugar al delito de blanqueo, solo será punible cuando se dé este cobro para ocultar el origen de los bienes y consolidar el patrimonio del infractor, es decir, cuando este cobro ya no sea propiamente un cobro por los servicios realizados, sino un elemento más de unión de voluntades entre el abogado y el infractor previo para blanquear.

#### **IV. CONCLUSIONES**

El problema que nace con la teoría moderna penal sobre los actos neutrales ha traspasado el alcance de la discusión académica, alcanzando una mayor cobertura en las decisiones jurisprudenciales, al tener que pronunciarse los tribunales sobre la punibilidad o no de este tipo de acciones.

Esto se debe a que los tipos de cooperación recogidos en los artículos 28 b) y 29 del CP contienen una regulación tan amplia que puede dar lugar a la subsunción en él de conductas que se desarrollan en el tráfico económico diario, pero que pueden servir de ayuda a los delincuentes en sus planes delictivos. Esto nos sitúa ante la teoría de los actos neutrales.

Como destacábamos, la doctrina se esfuerza en proponer criterios para restringir la punibilidad de este tipo de acciones. Parece coincidir de forma prácticamente unánime en que las carencias provocadas por intentar delimitar la punibilidad a través del ámbito subjetivo hacen que se deba ubicar el problema en el marco de la tipicidad. Por tanto, la acción debe ser causal, pero, además, debe cumplir con los requisitos de la imputación objetiva, es decir, que provoque un aumento del riesgo permitido y que este se concrete en el resultado. Se ha contrastado en este trabajo que los criterios para determinar si se supera ese riesgo permitido son muy variados: van desde las teorías sobre la adecuación social al principio de confianza pasando por el de prohibición de regreso, entre muchas otras.

Un primer punto a destacar en este análisis de los actos neutrales es la incidencia que tienen en el seno del delito de blanqueo de capitales, donde el delito lo definíamos como un proceso de operaciones mediante el cual los bienes o dinero resultantes de actividades delictivas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero. Pero, como hemos matizado, la problemática se da en el campo de la autoría y no de la participación, ya que este mismo delito es la tipificación de una participación post-delictiva, generándose un amplísimo debate sobre si deben ser merecedoras de castigo o debe restringirse el radio de acción del delito para salvar su tipicidad.

En este sentido, la configuración por la que ha optado el legislador español del delito de blanqueo de capitales en su artículo 301.1 del CP no ha cerrado el debate doctrinal y jurisprudencial, sino todo lo contrario, tras la inclusión de las conductas de «poseer» y «utilizar», con las que, por recomendaciones internacionales no muy acertadas y necesidades políticas debido a la grave crisis del momento, parece quedar claro que se ha querido configurar la sanción de dos conductas de forma independiente. Con ello se ha creado un elefantiásico tipo delictivo que incluye una gran mayoría de lo que consideramos como actos neutrales, actos acordes con el desarrollo normal de la sociedad, que no cabe tener por típicos. Creemos que se está intentando aislar económicamente a los autores del delito previo y esta idea provoca serias dudas de carácter constitucional, ya que estos actos están protegidos por el ámbito general de libertad que garantiza la Constitución y, además, provocarían una inversión del carácter de *ultima ratio* del derecho penal, siendo punibles la mayoría de actos y, de forma extraordinaria, quedando fuera de la sanción.

Por todo ello, creemos que es más que necesario hacer una interpretación restrictiva, porque buscar un aislamiento social como parece indicar la literalidad del texto, es dudoso e irreal porque basta con que el blanqueador se vaya a un pueblo lejano donde no le conozcan para que se le venda pan.

Creemos que la interpretación más apropiada se basa, en primer lugar, en entender que el artículo 301.1 del CP tipifica dos conductas independientes, por tanto, no cabe vincular las conductas de este apartado con la finalidad de ocultar, encubrir o ayudar, en sentido subjetivo. No creemos, que esta opción que destaca la jurisprudencia sea la correcta para restringir el tipo. En segundo lugar, consideramos que esta cuestión debe analizarse desde la perspectiva de la imputación objetiva, que no solo se debe dar una subsunción formal de la conducta en el tipo, sino que deben cumplirse los requisitos de la imputación objetiva, es decir, que se dé un aumento del riesgo permitido que finalmente se materialice en el resultado.

Una vez aclarado esto, para encontrar la herramienta correcta para restringir el tipo, coincidimos con parte de la doctrina en que se debe plantear la cuestión desde la óptica del fin de protección de la norma. Pero aquí no podemos estar de acuerdo en que no existen bienes jurídicos protegidos en este delito, pues como se dijo, debemos distinguir, en primer lugar, la protección del bien jurídico y la *ratio legis* de la norma. Una vez sentado que la punición del blanqueo se debe a su utilización como un instrumento, consideramos que las conductas solo podrán ser típicas, cuando: aumenten el riesgo permitido, es decir, las conductas de ocultación y encubrimiento en sentido objetivo; y cuando le sirvan, *ex ante*, al potencial autor del delito previo como motivación para realizarlo. Por ello, estas conductas son aquellas que dejan sin efecto el carácter instrumental del blanqueo y serán las que traspasen ese riesgo permitido. Para que la conducta sea considerada como una ocultación o encubrimiento, esta debe introducirse dentro del plan delictivo del autor del delito previo, para apreciar si existe esa relación delictiva debemos acudir a criterios de solución adicionales, como la proximidad al hecho antijurídico, o el conocimiento o reconocimiento del

plan delictivo. Por último, ese aumento del riesgo permitido además de producirse se debe concretar en el resultado prohibido, estas serán, las acciones que mediante una ocultación desvinculen los bienes de su origen delictivo y así consoliden el aumento patrimonial del delincuente.

## V. BIBLIOGRAFÍA

- ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional: especial referencia a los aspectos penales*, Santiago de Compostela (Universidad de Santiago de Compostela), 2002.
- BAJO FERNÁNDEZ, M. y BACIGALUPO SAGGESE, S., *Derecho penal económico*, 2.<sup>a</sup> ed., Madrid (Ramón Areces), 2010.
- BAJO FERNÁNDEZ, M. y BACIGALUPO SAGGESE, S. (eds.), *Política criminal y blanqueo de capitales*, Madrid (Marcial Pons), 2009.
- BLANCO CORDERO, I., *El delito de blanqueo de capitales*, 4.<sup>a</sup> ed., Pamplona (Aranzadi), 2015.
- BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva: las acciones neutrales y la cooperación en el delito*, Granada (Comares), 2003.
- BLANCO CORDERO, I., «Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales», en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, vol. 50, 1997, pp. 263-291.
- CEREZO MIR, J., *Curso de derecho penal español, Parte General, II. Teoría jurídica del delito*, 6.<sup>a</sup> ed., Madrid (Tecnos), 1998.
- DEL CARPIO DELGADO, J., «Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales», *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 4, 2016.
- DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., «Blanqueo de capitales», en *Memento Práctico Penal 2017*, Madrid (Francis Lefebvre), 2017.
- DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., «El Blanqueo de capitales y su regulación en España», *Doctrina y Jurisprudencia Penal*, núm. 26, 2016, pp. 3-36.
- DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El blanqueo de capitales en el Derecho Español*, Madrid (Dykinson), 1999.
- FABIÁN CAPARRÓS, E., *El delito de blanqueo de capitales*, Madrid (Colex), 1998.

- FEIJOO SÁNCHEZ, B., *Límites de la participación criminal ¿Existe una prohibición de regreso como límite general del tipo en el derecho penal?*, Bogotá (Universidad Externado de Colombia), 1999.
- FERRÉ OLIVÉ, J.C. (ed.), *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario. Delitos financieros, fraude y corrupción en Europa*, Vol. II, Salamanca (Ediciones de la Universidad de Salamanca), 2002.
- GOMEZ TOMILLO, M., *Libertad de información y teoría de la codeinfluencia. La autoría y la participación en los delitos cometidos a través de los medios de comunicación*, Granada (Comares), 1998.
- LÓPEZ PEREGRÍN, M.<sup>a</sup> C., *La complicidad en el delito*, Valencia (Tirant lo Blanch), 1997.
- MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa, parte especial*, 5.<sup>a</sup> ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2015.
- MOLINA FERNÁNDEZ, F., «¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: Reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la “participación” en el delito», en *Política criminal y blanqueo de capitales*, Madrid (Marcial Pons), 2009.
- PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, Madrid (Edersa), 2000.
- RODRIGUEZ MOURULLO, G., *Derecho penal, Parte General*, Madrid (Civitas), 1977.
- SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., «Blanqueo de capitales y abogacía. Un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva», *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 1, 2008.
- SILVA SÁNCHEZ, J.M. (dir.), *¿Libertad económica o fraudes punibles?*, Madrid (Marcial Pons), 2003.
- SMITH J. y HOGAN B., *Criminal Law*, 14.<sup>a</sup> ed., Oxford (Oxford University Press), 2015.
- VIVES ANTÓN, T. S. y GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *Comentarios al Código penal de 1995*, vol. II, Valencia (Tirant lo Blanch), 1996.
- VIVES ANTÓN, T. S., *Fundamentos del Sistema penal*, 1.<sup>a</sup> ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 1996.
- WILLIAMS G., *Textbook of Crime Law*, 1.<sup>a</sup> ed., Londres (Stevens & Sons), 1978.
- WILLIAMS G., *Criminal Law: The General Part*, 2.<sup>a</sup> ed., Londres (Stevens & Sons), 1961.